

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00825-00
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS
Demandante: MARCOS ALBERTO VIAFARA VELA
(castaoyasociados@hotmail.com)
(castanooviedohectorfabio@gmail.com)
Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
(njudiciales@valledelcauca.gov.co)
(jcgomezgaviria@hotmail.com)
Ministerio Público: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI
(procjudadm19@procuraduria.gov.co)
Asunto: ACEPTA DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Marcos Alberto Viafara Vela pidió que se declarara la nulidad de la Resolución 03266 del 20 de diciembre de 2017 —que corrigió la Resolución 8705 del 28 de octubre de 2015— que reconoció y ordenó el pago de la sanción moratoria originada por la no consignación oportuna de las cesantías del personal administrativo del régimen anualizado, dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos.
2. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 4 de marzo de 2022, el apoderado de la parte demandante solicitó el desistimiento de las pretensiones de la demanda, que se dé por terminado el proceso y se abstenga de condenar en costas.
3. De la solicitud de desistimiento se corrió traslado, por el término de tres días (16, 17 y 18 de marzo de 2022), a la parte demandada que, en escrito enviado por correo electrónico el 15 de marzo de 2022 y con sustento en providencias del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle, no coadyuvó la petición de desistimiento, pues consideró que después de un proceso de homologación y nivelación salarial no procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y, en su lugar, se debe ordenar el reintegro de los recursos que recibió el demandante por parte del departamento del Valle del Cauca. En ese orden de ideas, estimó que el presente asunto versa sobre dineros públicos de la demandada, que pueden verse comprometidos, por lo que solicitó no aceptar el desistimiento y, en su defecto, continuar con el desarrollo del proceso.

4. El soporte de la demandada para no coadyuvar la solicitud de desistimiento, en concreto, proviene de la postura adoptada por la sala de decisión de la que forma parte la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavidez¹ y en la que, más allá de negar las pretensiones de la demanda —de reconocer el 100% de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 y no el 70%— declara la nulidad de la Resolución 8705 de 2015, pero bajo el supuesto de que los reajustes a la liquidación del auxilio de cesantías, derivados del proceso de homologación y nivelación salarial, no dan lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Lo anterior, con fundamento en providencia del Consejo de Estado (2018)² que establece que *«en los eventos en los que se reconozca una diferencia respecto del salario base de liquidación del auxilio de cesantías con ocasión de una nivelación salarial, ello no implica el reconocimiento de la sanción moratoria, toda vez que al tratarse de una sanción que se configura por una conducta determinada en la ley en cabeza del empleador que incumpla el plazo señalado en la ley para consignar el valor liquidado por la anualidad o fracción correspondiente en el fondo administrador seleccionado por el empleado y no podrá aplicarse a otras situaciones fácticas, en tanto ello desconoce el principio de legalidad y a su vez, la garantía esencial del debido proceso»*.

5. En virtud de la postura mencionada, dicha sala de decisión, a título de restablecimiento del derecho a favor de la demandada, ordena al demandante que resultó beneficiado con el pago del 70% de la sanción moratoria a devolver lo reconocido y pagado. Al respecto, esa sala de decisión manifiesta que:

(...) corresponde al juez, como árbitro del litigio y garante del principio de legalidad, verificar, caso a caso, que las situaciones jurídicas en curso se ajusten al ordenamiento aplicable y en uso de sus competencias y atribuciones legales y constitucionales, debe declarar la nulidad con efectos ex tunc en los casos que impliquen una afectación al ordenamiento jurídico y al patrimonio público. Ello no vulnera el derecho al debido proceso, la defensa y la contradicción de la parte actora precisamente porque fue ella quien sometió al escrutinio judicial la legalidad del acto administrativo por infracción del ordenamiento en que debía fundarse.

(...)

En tal sentido, al anular la Resolución nro. 807 del 28 de octubre de 2015 proferida por el Departamento del Valle del Cauca con efectos ex tunc, las cosas se retrotraen al estado anterior a la expedición del acto y la parte demandante deberá devolver el valor reconocido en dicho acto administrativo.

6. La anterior argumentación no es compartida por esta Sala Decisión, toda vez que un pronunciamiento con esos alcances desconoce las situaciones jurídicas consolidadas.

7. En efecto, el reconocimiento y pago del 70 % de la sanción moratoria constituye una situación jurídica que no fue discutida por las partes en su debida oportunidad y, por ende, quedó consolidada. Téngase en cuenta que el beneficiario de la sanción no controvierte el 70 % que se le pagó, sino que discute que se haya aplicado la figura de la revocatoria directa —con la Resolución 03266 del 20 de diciembre de 2017 al corregir la Resolución 8705 del 28 de octubre de 2015— por fuera del término legal

1 Sentencias del 27 de agosto y el 9 de septiembre de 2020 proferidas, respectivamente, en los procesos 76001-33-33-003-2016-00130-01 y 76001-33-33-004-2016-00136-01.

2 Consejo de Estado, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicado interno No. 1172-2016.

y sin el consentimiento expreso del demandante, de ahí que únicamente este segundo aspecto sea el que se erija como situación jurídica en discusión.

8. Ahora, si la administración efectuó un reconocimiento de un derecho que era inexistente (70 % de la sanción moratoria), la forma de impedir que se consolidara esa situación era iniciando el trámite de revocatoria directa o acudiendo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar su propio acto, dentro de los términos previstos en la Ley. Sin embargo, el departamento del Valle del Cauca no obró de esa manera.

9. Si bien la defensa del patrimonio público es un derecho colectivo de importancia mayúscula en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que el principio de seguridad jurídica (que atiende a preservar las situaciones jurídicas consolidadas) es el que debe primar en un escenario como este, en el que no se advierte un actuar temerario o de mala fe del empleado, quien de buena fe recibió el pago que unilateralmente reconoció la autoridad administrativa.

10. A lo anterior se suma el hecho de que la parte que formula pretensiones en sede judicial persigue un interés, esto es, procura la obtención de un beneficio, de ahí que vaya en contravía del debido proceso que la autoridad judicial, al definir el asunto, le ocasione una desmejora a su derecho, sin una autorización legal expresa en ese sentido.

11. Así las cosas, la Sala considera que el argumento esgrimido por el departamento del Valle del Cauca para oponerse al desistimiento es improcedente y, por consiguiente, sí se dará trámite a la solicitud de la parte demandante. Dicho esto, se procederá al estudio de los presupuestos que habilitan el desistimiento de las pretensiones.

12. La figura del desistimiento de la demanda o de las pretensiones no está prevista expresamente en la Ley 1437 de 2011, pero sí en el Código General del Proceso, estatuto procesal al que debe remitirse en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. En ese sentido, el artículo 314 del Código General del Proceso establece que *«el demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. (...) El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada»*.

13. En el presente asunto, el apoderado de la parte actora, acorde con el poder especial aportado con la demanda³, está facultado expresamente, entre otras, para *«recibir todas las sumas de dinero, descontar honorarios, conciliar, transigir, **desistir**, recurrir (...) y en general todas las que le confiere la ley sin que pueda argumentarse insuficiencia en el mandato»*. Es decir, cuenta con facultad expresa para ello.

14. Adicionalmente, téngase en cuenta que no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso, pues el trámite quedó en la etapa previa a la audiencia inicial.

³ Folios 1 a 2 del expediente físico.

15. Por otra parte, la Sala no impondrá condena en costas, pues no se incurrió en gastos procesales o expensas en el trámite de este expediente.

En mérito de lo expuesto, la Sala

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO presentado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DAR POR TERMINADO el proceso, según lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por Samai)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES

(Firmado electrónicamente por Samai)
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

(Firmado electrónicamente por Samai)
ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT